

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-009-2017-00800-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes, causación, principio de la condición más beneficiosa, test de procedencia - sentencia SU-005 de 2018.
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

En esta oportunidad, teniendo en cuenta que mediante auto del 6 de febrero de 2020 se aceptó impedimento a la magistrada integrante de esta sala, Dra. Luz Amparo Gómez Aristizábal, se reconstituyó esta sala con la magistrada

María Eugenia Gómez Velásquez, quien continua en el orden alfabético de todos los integrantes de esta sala de decisión.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 031**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia absolutoria que profirió el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 6 de diciembre de 2018, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA convivió en unión marital de hecho como compañera permanente del señor JAIME MAHECHA MARÍN durante más de 30 años, tiempo durante el cual procrearon 2 hijos de nombres Omar Augusto y Juan Wilson Mahecha Sánchez, y compartieron techo, lecho, y mesa hasta el 7 de julio de 2008, fecha de fallecimiento del señor MAHECHA MARÍN.

Con ocasión al fallecimiento del afiliado MAHECHA MARÍN, la demandante elevó solicitud pensional ante COLPENSIONES el día 3 de mayo de 2012, pero dicha prestación económica le fue negada a través de la resolución N° GNR-137452 de 2013, bajo el argumento que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional, al no reunir 50 semanas de cotización en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento, negativa que luego fue confirmada a través de los actos administrativos GNR-12652 de 2014 y VPB-23744 de 2014 que desataron los recursos interpuestos.

Que la actora presentó una segunda solicitud pensional, pero también le fue negada la prestación económica a través de las resoluciones N° GNR-135346 de 2015 y GNR-307000 de 2015, y luego el día 3 de diciembre de 2015, decide reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, reconocimiento que se dio a través de la resolución N° GNR-37604 de 2016, en cuantía única de \$3.118.756.

Finalmente aduce el escrito introductorio que el afiliado fallecido sí dejó causado el derecho pensional a favor de sus beneficiarios, pues contaba con más de 500 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 356 semanas lo estaban al 1° de abril de 1994.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que a la señora FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA le asiste derecho a una pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del afiliado fallecido JAIME MAHECHA MARÍN, lo anterior en aplicación del principio constitucional de la condición mas beneficiosa, en consecuencia, SE CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al reconocimiento y pago de esta prestación económica en forma retroactiva a partir del 7 de julio de 2008, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, y/o la indexación de las condenas, lo que ultra y extra petita resulte probado en el proceso, y las costas del mismo.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES a través de su apoderada judicial dio respuesta oportuna a la demanda (fls. 45 al 49) manifestando frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden a las solicitudes pensionales presentadas por la demandante, y la respuesta obtenida a través de los actos administrativos anunciados en la demanda, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de

mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, POR AUSENCIA DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES; PETICIÓN DE LO NO DEBIDO; IMPROCEDENCIA INTERESES MORATORIOS; PRESCRIPCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; COMPENSACIÓN INDEXADA; EXCEPCIÓN INNOMINADA; y DESCUENTO DEL RETROACTIVO POR SALUD”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el JUEZ NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 6 de diciembre de 2018, ABSOLVIÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por la señora FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA, a quien le fueron impuestas las costas del proceso en la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma de \$100.000.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que la demandante solo reúne 2 de las cinco condiciones establecidas por la Corte Constitucional la sentencia SU-005 de 2018, pues para la fecha en que falleció el causante, no pertenecía a un grupo de especial protección constitucional, tampoco demostró que el causante se encontrare en circunstancias en las cuales no le fuere posible cotizar las semanas exigidas, y menos aún se probó una diligencia e inmediatez de la demandante en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; no siendo posible acceder a la pensión de sobrevivientes deprecada, con el doble salto normativo de la Ley 797 de 2003 al acuerdo 049 de 1990.

También coligió el fallador de instancia, que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional en aplicación del parágrafo del art. 12 de la Ley 797 de 1993, pues este no era beneficiario del régimen de transición, y tampoco reunía la densidad de cotizaciones exigida en el primigenio art. 46 de la Ley 100 de 1993, en aplicación de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de

Justicia, según la cual, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, se limita a la ley inmediatamente anterior.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Su apoderado judicial solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado, al considerar que el causante MAHECHA MARÍN si dejó causado el derecho pensional a favor de su compañera permanente supérstite, lo anterior, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa con remisión al acuerdo 049 de 1990.

Señala que en el *sub lite* si se satisfacen las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018, pues si bien es cierto, la demandante no era analfabeta, persona enferma o de la tercera edad para la fecha de fallecimiento del causante, si se debe tener en cuenta la pobreza extrema en que vivía este núcleo familiar para el mes de julio de 2008, tal y como lo relataron los testigos arrimados al proceso, y el simple hecho de no tener que pagar arriendo, no significaba una superación de ese estado de pobreza extrema.

Y en relación con la cuarta y quinta condición del test de procedencia, indicó este recurrente, que no resulta factible exigir al causante, quien era vendedor ambulante de agujas y botones, que efectuara aportes a seguridad sociales, pues este afiliado con sus bajos ingresos debía sostener un núcleo familiar conformado por cuatro personas, circunstancia que le impedía realizar los aportes pensionales, inclusive con el subsidio del estado, y que contrario a lo resuelto por el a quo, la demandante si fue oportuna en su reclamo pensional,

Alegatos de conclusión.

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Pensión de sobrevivientes, causación, aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, los problemas jurídicos estriban en dilucidar, si el afiliado fallecido JAIME MAHECHA MARÍN, dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa.

Y en caso afirmativo, pasará la Sala a determinar si la demandante FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA, logró acreditar los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la prestación económica que por esta acción judicial reclama, la fecha de disfrute pensional, el retroactivo adeudado, y la procedencia de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto la indexación de las condenas.

Para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

- *La muerte del afiliado JAIME MAHECHA MARÍN, insuceso acaecido el 7 de julio de 2008, según lo acepta COLPENSIONES en la resolución N° GNR-137452 del 20 de junio de 2013 (fls. 10 y 11).*

- *La reclamación pensional efectuada por la demandante FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA el día 3 de mayo de 2012 (fls. 10), y la respuesta dada por COLPENSIONES a través de la resolución N° GNR-137452 del 20 de junio de 2013 (fls. 10 y 11), en la que se indicó que el afiliado fallecido no había dejado causado el derecho pensional, al no contar con 50 semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores al deceso, pues su última cotización data 24 de enero de 1998.*
- *Que según la historia laboral aportada con la demanda, visible a folios 27 al 28 del plenario, el afiliado JAIME MAHECHA MARÍN registra un total de 473,43 semanas cotizadas al sistema general de pensiones entre el 18-11-1967 al 30-06-1998.*
- *Y finalmente esta probado, que a la demandante FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA, en su calidad de compañera permanente superviviente del afiliado fallecido MAHECHA MARÍN, le fue reconocida una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a través de la resolución N° GNR-37604 del 3 de febrero de 2016 (fls. 20 al 22) en cuantía única de \$3.118.756.*

Por lo tanto, procederá la Sala a analizar el primer problema jurídico planteado, esto es, si este afiliado dejó causado o no el derecho pensional en favor de sus eventuales beneficiarios, al respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 2° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la ley 797 de 2003, que era la normatividad vigente al momento del fallecimiento del afiliado MAHECHA MARÍN, veamos:

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento...**”

Teniendo en cuenta la densidad mínima de cotizaciones exigida en el citado precepto legal, esta Sala procedió a revisar la historia laboral más actualizada del afiliado, obrante a folios 27 al 28 del plenario, encontrando que el señor MAHECHA MARÍN tenía en su haber 0 semanas cotizadas entre el 7 de julio de 2005 y el 7 de julio de 2018, esto es en los 3 años anteriores a su deceso.

En ese orden de ideas, podría decirse en principio, que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del art. 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y por ello se pasará a estudiar, si este derecho se causó en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa que se solicita en la alzada.

El principio de la condición más beneficiosa

Frente al tema, debe recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido el criterio de aplicación del principio de condición más beneficiosa, explicando que, al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal, es decir, que no es dable emplearla con un carácter indefinido. Ha explicado la Corte que, en los casos en que la contingencia (en este caso la muerte) acontece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y se pretende la aplicación de dicho principio no resulta admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pasado en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Esta tesis ha venido sosteniéndose, refrendándose y reiterándose por la Sala Laboral de la Corte en las sentencias rad. 32.642 del 9 de diciembre de 2008, SL7275-2015, SL7205-2015, SL6362-2015 y la SL4650-2017 – con radicación N° 45.262 del 25 de enero de 2017.

En esta última providencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejó en claro que solo era posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima, para garantizar y proteger, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo

46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. Estimó la Corte que no podía pasarse por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

En síntesis, de acuerdo con el criterio jurisprudencial abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no resulta procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa para aplicar una norma distinta a la inmediatamente anterior, dado que el causante falleció en fecha posterior al 29 de enero de 2006.

No obstante, y si bien el órgano de cierre en la especialidad laboral es la Corte Suprema de Justicia, esta Sala de Tribunal no desconoce la tesis que de manera simultánea, ha venido sosteniendo la CORTE CONSTITUCIONAL frente al principio de la condición más beneficiosa, en innumerables sentencias, donde ha expresado su criterio frente al tema, sosteniendo que, no solo la norma pensional vigente (Ley 797 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta última (Decreto 758 de 1990) puede aplicarse a una solicitud de pensión de sobrevivientes, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotización previstas en este último antes de expirar su periodo de vigencia. (Ver entre otras las sentencias T-401 de 2015, T-464 de 2016, T-084 de 2017, T-235 de 2017, T-294 de 2017 y T-378 de 2017, criterio jurisprudencial del que solicita su aplicación la parte recurrente, toda vez que afiliado fallecido registra en su historia laboral con más de 300 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994 (465,71 semanas), satisfaciendo así la densidad mínima de cotizaciones que otrora exigía el acuerdo 049 de 1990.

No obstante, mediante la sentencia **SU-005/18**, la Corte Constitucional realizó un ajuste jurisprudencial a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, introduciendo un **TEST DE PROCEDENCIA** que permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de

sobrevivientes, por lo que se establecieron CINCO (5) CONDICIONES para poder superar el test de procedencia, a saber:

Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
Cuarta condición	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.
Quinta condición	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Encontrando la Sala que la PRIMERA, CUARTA y QUINTA condición del Test de Procedencia, no resultaron acreditadas en el *sub lite*, toda vez que la demandante FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA no hacía parte de ese grupo de especial protección constitucional al que se refiere la Corte Constitucional, esto es, aquellas personas que se encuentran en un riesgo permanente por su estado de analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.

Pues como bien lo concluyó el juez de primer grado, la demandante para el mes de julio de 2008, contaba con 46 años de edad, no padecía ninguna enfermedad que la dejara como una persona en estado de debilidad manifiesta y tampoco era analfabeta, cabeza de familia, o desplazada por la violencia u otras circunstancias, y en cuanto al estado de pobreza extrema, al que alude el recurrente en su recurso de alzada, debe decirse por parte de la Sala, que esta condición tampoco logró acreditarse en el sub examine, pues ni siquiera obra en el plenario la clasificación del SISBEN acerca de las condiciones

socioeconómicas que tenía la demandante y/o su núcleo familiar para el mes de julio 2008, o que esta o su núcleo familiar no tuvieran bienes para la fecha del infortunio, circunstancias que debieron acreditarse.

Y es que la pobreza extrema que relataron los testigos, esto es, que la demandante vivía en un espacio reducido con su núcleo familiar y que en dicho inmueble no habían lujos, como por ejemplo un televisor, no deja de ser una apreciación personal y subjetiva de estos testigos, que de manera alguna puede llevar a dar por satisfecha la primera condición del test de procedencia establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018, toda vez que la medición de la pobreza es tan difícil como su definición, y por ello su acreditación solo puede partir de determinados criterios objetivos, tales como: insuficiencia de ingresos, necesidades básicas insatisfechas, índice de calidad de vida, e índice de desarrollo humano, que no lograron probarse en el plenario.

En cuanto a la cuarta condición del test de procedencia, esto es, “...*que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes...*”; tampoco resultó acreditado en el plenario, pues según el recurrente el afiliado fallecido JAIME MAHECHA MARÍN, llevaba 10 años sin cotizar al sistema general de pensiones, porque sus ingresos no le eran suficientes para asumir esta carga pensional, ya que debía sostener a su núcleo familiar compuesto por su compañera permanente y dos hijos.

Sin embargo, estima la Sala que esas circunstancias a las que alude la jurisprudencia constitucional, están relacionadas con la fuerza mayor, es decir, que el afiliado se encontraba imposibilitado para continuar cotizando debido a una penosa enfermedad, invalidez, o privado de su libertad, supuestos en los que no se encontraba el causante JAIME MAHECHA MARÍN, no desconoce la Sala, que efectivamente una carga económica familiar puede llevar a desestimular la cotización al sistema general de pensiones, en aquellos periodos donde los ingresos mensuales del afiliado son reducidos, y escasamente se logran satisfacer las necesidades básicas, no obstante, en el caso del afiliado MAHECHA MARÍN, lo que se observa es que este había dejado de cotizar muchos años antes de ocurrido el fallecimiento, y el cese de sus cotizaciones fue definitivo.

Y finalmente, también comparte la Sala lo colegido frente a la CONDICIÓN QUINTA del Test de Procedencia, esto es, que la demandante FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA no fue oportuna en su solicitud pensional, por el contrario, para la fecha en que esta elevó la solicitud pensional ante COLPENSIONES (3 de mayo de 2012) ya había transcurrido el término prescriptivo trienal regulado en los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, por lo que aquellas mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de mayo de 2009, ya se encontraban afectadas por la prescripción, dada la tardanza el reclamar el eventual derecho pensional.

Corolario de lo anterior, si en el mejor de los casos esta Sala avalara la aplicación del principio de la condición más beneficiosa con el doble salto normativo al acuerdo 049 de 1990 como se pretende en la alzada, debe decirse que la demandante no supera el Test de Procedencia establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018, cuyas condiciones son concurrentes entre sí, esto es, que se deben acreditar las cinco condiciones a la vez para poder acceder al beneficio del doble salto normativo. Es por lo anterior que esta Sala confirmará la sentencia absolutoria de primer grado.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la desventura del recurso de apelación formulado por la activa, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de la señora FLOR MARGARITA SÁNCHEZ VALENCIA, y en favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de CIENTO MIL PESOS M/L (\$100.000).

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación de fecha 6 de diciembre de 2018, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de

Medellín, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de CIENTO MIL PESOS M/L (\$100.000).

TERCERO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del proceso al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° **106** del **21 de junio de 2021**.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>